

En Colombia, la guerra está en constante cambio. Me asombra que no haya nadie vivo en el país que no la haya vivido y me entristece que, a pesar de todos los esfuerzos, es probable que mi hija también la experimente.

Desde que tengo memoria, el sonido de las noticias de última hora en la televisión evoca recuerdos angustiosos. Las imágenes de marchas civiles pidiendo paz, mientras el expresidente, sentado solo en una mesa en medio de una zona desmilitarizada, avergonzado, era plantado por el líder de la extinta guerrilla de las FARC son ahora un meme, pero antaño, fueron el preludio del comienzo del siglo XXI, un período de exacerbación de la violencia, principalmente ejercida por el Estado y sus instituciones.

Ahora soy abogada de derechos humanos, pero también fui una niña de cuatro años en 1997, cuyo padre era cabo de la Fuerza Aérea Colombiana, creciendo en los llanos del país. A veces, mi familia viajaba a Bogotá para visitar familiares. Recuerdo vívidamente a mi madre advirtiéndome sobre la posibilidad de que nos detuvieran en la carretera los guerrilleros, escondiendo las tarjetas militares de mi padre bajo las alfombrillas del coche y pidiéndome (como un juego de niños, intentando protegerme) que nunca mencionara que mi padre trabajaba con aviones o en uniforme, sino que era panadero y se ganaba la vida haciendo pan. Todo fue confuso para mí, pero obedecí. Me pregunto cuántos recuerdos similares quedan en otras personas. Más tarde supe que las guerrillas solían practicar "pescas milagrosas" en las carreteras del país que conectan ciudades, que eran secuestros masivos en los que los combatientes se llevaban coches y personas para exigir dinero por su liberación.

Y —aunque hay que decir que la situación ha mejorado mucho en los últimos veinte años— durante las últimas décadas del siglo pasado, el conflicto en Colombia provenía de todos los frentes: guerrillas, paramilitares, bandas criminales y el Estado, todos alimentados por el dinero del narcotráfico.

Al comenzar el nuevo siglo, los grupos paramilitares cobraron fuerza y las últimas noticias en televisión anunciaban masacres perpetradas por ellos en todo el país, con la complicidad del Estado y las Fuerzas Armadas. Era imposible, por ejemplo, que cientos de paramilitares armados entraran en un pueblo y permanecieran allí durante cuatro días, torturando a los habitantes, saqueando sus tiendas y casas, y violando a sus mujeres. Recuerdo haber leído muchos años después que, del 17 al 21 de febrero de 2000, cuatrocientos hombres de las AUC entraron en el pueblo de El Salado y permanecieron allí durante días aterrorizando a la población (a la que acusaban de ser simpatizantes de la guerrilla). Los resultados de esa masacre fueron difíciles de calcular durante años y, hasta la fecha, se desconoce el número exacto de muertos y desaparecidos; hubo al menos sesenta. Este episodio trajo a los colombianos uno de los recuerdos más imborrables de la guerra: los paramilitares jugaron al fútbol con las cabezas de muchas víctimas. Dieciocho años después, tuve el privilegio de representar a estas víctimas ante una de las jurisdicciones transicionales creadas en mi país para superar el conflicto.

Mis convicciones personales y mis decisiones profesionales me han dado el privilegio de conocer a personas que han vivido la guerra y se han visto directamente afectadas por el conflicto civil en el país.

Visité el resguardo indígena de la comunidad indígena Embera-Katío en el Alto Sinú, en la región de Córdoba. Esta zona es conocida por ser una de las cunas de grupos paramilitares. Los territorios sagrados de los Embera-Katío y la defensa de sus tierras fueron una afrenta al avance territorial de los paramilitares, quienes los calificaron de "defensores izquierdistas de la tierra". Así, los Embera sufrieron homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos a manos de los paramilitares, quienes (patrocinados por grandes empresas extractivas, hidroeléctricas y otras) vieron a los indígenas como un obstáculo para el crecimiento económico de la región. Hasta el día de hoy, después de tanto sufrimiento y victimización, esta comunidad y su resguardo aún carecen de servicios básicos como electricidad o agua potable.









Visité El Salado, un pueblo que tenía siete mil habitantes antes de la masacre del año 2000 y que para 2018 contaba con alrededor de mil personas que habían decidido regresar, al no encontrar calidad de vida en ningún otro lugar. Regresar al pueblo donde habían vivido tantos horrores, pero que también consideraban su hogar, fue una valentía agrí dulce; sus esfuerzos por reconstruir la historia de su pueblo se enfrentaron a amenazas de grupos paramilitares y criminales asentados en la zona.

Veintitrés años después de la masacre, volví a trabajar con la comunidad de El Salado, tras haber centrado mi carrera en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Dos décadas después, el Estado colombiano aún tiene una deuda con El Salado. Como en muchos otros casos, el Estado solo se ha manifestado a través de la militarización de la zona. La presencia de militares ha traído consigo nuevos problemas de victimización, como la presencia de soldados adultos armados con poder (simbólico o real) sobre la población que establecen «relaciones románticas» con niñas, en algunos casos de tan solo doce años (configurando relaciones abusivas que generan nuevos y mayores círculos de explotación y violencia para las mujeres y niñas de una comunidad ya demasiado victimizada). La guerra ha demostrado que las mujeres y las niñas sufren sus consecuencias de forma desproporcionada en comparación con los hombres. Si bien los combatientes ven a los civiles varones como

blancos cuando piensan que ayudan a sus enemigos, los cuerpos de las mujeres son vistos por las partes como "territorios de guerra" (a pesar de que la cosificación de los cuerpos feminizados es problemática). Las mujeres sufren violencia sexual y actos delictivos que sus homólogos masculinos rara vez sufren. Se las considera "más débiles" e, irónicamente, también como los cimientos que sustentan las comunidades; herirlas puede tener un impacto irreparable en el tejido social del enemigo.



A pesar de todo, los colombianos seguimos adelante, reconstruyéndonos, aprendiendo. Por primera vez en la historia de nuestro país, elegimos a un presidente de izquierda en 2022, el

primero en sobrevivir a las elecciones. Colombia es ahora uno de los países con las economías más estables de América Latina y, aunque aún queda mucho por hacer, nuestra resiliencia nos impulsa.

Laura

